

Laicismo: cinco tesis

FERNANDO SAVATER

El debate sobre la relación entre el laicismo y la sociedad democrática actual (en España y en Europa) viene ya siendo vivo en los últimos tiempos y probablemente cobrará nuevo vigor en los que se avecinan: dentro de nuestro país, por las decisiones políticas en varios campos de litigio que previsiblemente adoptará el próximo Gobierno; y en toda Europa, a causa de los acuerdos que exige la futura Constitución europea y por la amenaza de un terrorismo vinculado ideológicamente a determinada confesión religiosa. En cuestiones como ésta, en que la ceguera pasional lleva a muchos a tomar por enemistad diabólica con Dios el veto a ciertos sacristanes y demasiados inquisidores, conviene intentar clarificar los argumentos para dar precisión a lo que se plantea. A ello y nada más quisieran contribuir las cinco tesis siguientes, que no pretenden inaugurar mediterráneos, sino sólo ayudar a no meternos en los peores charcos.

1) Durante siglos, ha sido la tradición religiosa —institucionalizada en la iglesia oficial— la encargada de vertebrar moralmente las sociedades. Pero las democracias modernas basan sus acuerdos axiológicos en leyes y discursos legitimadores no directamente confesionales, es decir, discutibles y revocables, de aceptación en último caso voluntaria y humanamente acordada. Este marco institucional secular no excluye ni mucho menos persigue las creencias religiosas: al contrario, las protege a las unas frente a las otras. Porque la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido históricamente a causa de la enemistad intolerante de unas religiones contra las demás o contra los herejes. En la sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás como ella misma quiere ser tratada... y no como piensa que las otras se merecen. Convertidos los dogmas en creencias particulares de los ciudadanos, pierden su obligatoriedad general pero ganan en cambio las garantías protectoras que brinda la Constitución democrática, igual para todos.

2) En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto *derecho* de quienes las asumen, pero no como *deber* que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de

la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos. Lo mismo resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas, tal como dice Tzvetan Todorov: "Pertener a una comunidad es, ciertamente, un derecho del individuo pero en modo alguno un deber; las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero sólo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia" (*Memoria del mal*).

3) Las religiones pueden decretar para orientar a sus creyentes qué conductas son *pecado*, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado legalmente *delito*. Y a la inversa: una conducta tipificada como delito por las leyes vigentes en la sociedad laica no puede ser justificada, ensalzada o promovida por argumentos religiosos de nin-

gún tipo ni es atenuante para el delincuente la fe (buena o mala) que declara. De modo que si alguien apalea a su mujer para que le obedezca o apedrea al sodomita (lo mismo que si recomienda públicamente hacer tales cosas), da igual que los textos sagrados que invoca a fin de legitimar su conducta sean auténticos o apócrifos, estén bien o mal interpretados, etcétera...: en cualquier caso debe ser penalmente castigado. La legalidad establecida en la sociedad laica marca los límites socialmente aceptables dentro de los que debemos movernos todos los ciudadanos, sean cuales fueren nuestras creencias o nuestras incredulidades. Son las religiones quienes tienen que acomodarse a las leyes, nunca al revés.

4) En la escuela pública sólo puede resultar aceptable como enseñanza lo *verificable* (es decir, aquello que recibe el apoyo de la realidad científicamente contrastada en el momento ac-

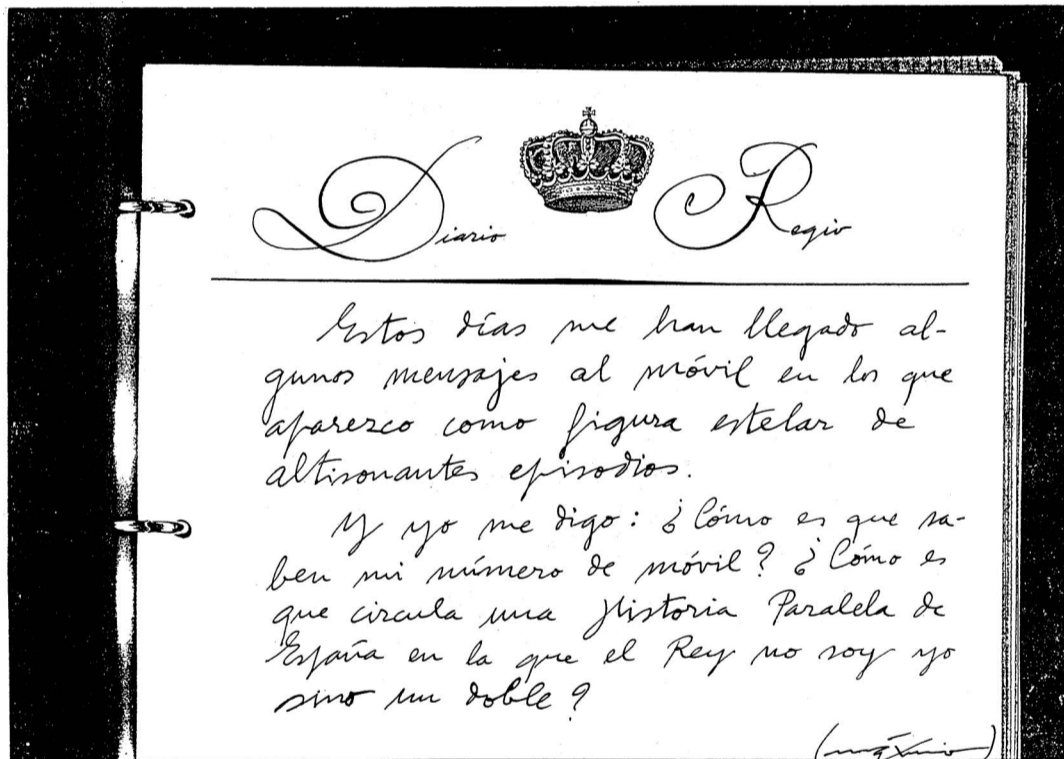
tual) y lo civilmente establecido como *válido para todos* (los derechos fundamentales de la persona constitucionalmente protegidos), no lo inverificable que aceptan como auténtico ciertas almas piadosas o las obligaciones morales fundadas en algún credo particular. La formación catequística de los ciudadanos no tiene por qué ser obligación de ningún Estado laico, aunque naturalmente debe respetarse el derecho de cada confesión a predicar y enseñar su doctrina a quienes lo deseen. Eso sí, fuera del horario escolar. De lo contrario, debería atenderse también la petición que hace unos meses formularon medio en broma medio en serio un grupo de agnósticos: a saber, que en cada misa dominical se reservasen diez minutos para que un científico explicara a los fieles la teoría de la evolución, el Big Bang o la historia de la Inquisición, por poner algunos ejemplos.

5) Se ha discutido mucho la oportunidad de incluir alguna mención en el preámbulo de la verdadera Constitución de Europa a las raíces cristianas de nuestra cultura. Dejando de lado la evidente cuestión de que ello podría entonces implicar la inclusión explícita de otras muchas raíces e influencias más o menos determinantes, dicha referencia plantearía interesantes paradojas. Porque la originalidad del cristianismo ha sido precisamente dar paso al vaciamiento secular de lo sagrado (el cristianismo como la religión para salir de las religiones, según ha explicado Marcel Gauchet), separando a Dios del César y a la fe de la legitimación estatal, es decir, ofreciendo cauce precisamente a la sociedad laica en la que hoy podemos ya vivir. De modo que si han de celebrarse las raíces cristianas de la Europa actual, deberíamos rendir homenaje a los antiguos cristianos que repudiaron los ídolos del Imperio y también a los agnósticos e incrédulos posteriores que combatieron al cristianismo convertido en nueva idolatría estatal. Quizá el asunto sea demasiado complicado para un simple preámbulo constitucional...

Coda y final: el combate por la sociedad laica no pretende sólo erradicar los pujos teocráticos de algunas confesiones religiosas, sino también los sectarismos identitarios de etnicismos, nacionalismos y cualquier otro que pretenda someter los derechos de la ciudadanía abstracta e igualitaria a un determinismo segregacionista. No es casualidad que en nuestras sociedades europeas deficientemente laicas (donde hay países que exigen determinada fe religiosa a sus reyes o privilegian los derechos de una iglesia frente a las demás) tenga Francia el Estado más consecuentemente laico y también el más unitario, tanto en su concepción de los servicios públicos como en la administración territorial. Por lo demás, la mejor conclusión teológica o ateológica que puede orientarnos sobre estos temas se la debo a Gonzalo Suárez: "Dios no existe, pero nos sueña. El Diablo tampoco existe, pero lo soñamos nosotros" (*Acción-Ficción*).

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

MÁXIMO



CARTAS

AL DIRECTOR

Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que estén firmados y que conste el domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así como de resumirlas o extractarlas. No se devolverán los originales no solicitados, ni se dará información sobre ellos. Correo electrónico: CartasDirector@elpais.es. Una selección más amplia de cartas puede encontrarse en: www.elpais.es

Enseñanza y problema social

En respuesta a la carta publicada por don Enric Vidal el 1 de abril de 2004, he de decir lo siguiente: coincido con usted en la necesidad de un gran pacto social de consenso por la enseñanza. Pero

es un error considerar que los problemas de la educación en nuestro país derivan de la "falta de un control riguroso de la calidad de la práctica docente". Esta afirmación sólo se puede hacer desde el desconocimiento de dicha práctica. Informes recientes concluyen que los resultados en educación se deben más al ambiente familiar que rodea al alumno que a otros factores.

Efectivamente, uno de los problemas más importantes que tiene la educación hoy es el de la indisciplina de los alumnos, especialmente en la enseñanza media. Indisciplina que sufrimos injustamente los profesores. Los padres no se preocupan o no pueden conseguir que sus hijos tengan una actitud favorable hacia la enseñanza y respeto a los profesores.

La Administración ha hecho muy poco hasta ahora para solucionar este problema. Se trata de un problema social complejo y de la mayor importancia y, como todo problema complejo, no se soluciona con respuestas sim-

ples. Si no somos conscientes de esto, ningún pacto social, ningún control de calidad, garantizará la formación de nuestros hijos.

Los profesionales de la enseñanza no somos magos y no hacemos milagros; resulta muy difícil educar a alguien que no quiere ser educado y, como decía Ortega y Gasset, no se puede convencer a alguien que no quiere ser convencido.— **Miguel Ángel Vilalvilla Soria**. Cuenca.

Bibliotecas públicas y derechos de autor

La Unión Europea está presionando al Gobierno español para que cambie la actual Ley de Propiedad Intelectual y haga que las bibliotecas públicas paguen derechos de autor por los préstamos que hacen a sus lectores.

Los bibliotecarios se oponen a que se haga ese pago porque consideran que las obras que las bibliotecas tienen ya han satisfecho sus derechos de autor. Pagar

más derechos de autor reduciría peligrosamente los presupuestos para compra de nuevos libros.

Esto supone, en mi opinión, un nuevo colmo en el fenómeno de la globalización; parece ser que desean que por todo se pague y que la cultura y la educación sean un asunto secundario de la sociedad, cuando es uno de los primarios, por no decir el más fundamental.

Ahora se quejarán de que se diga que la población pertenece a diferentes estratos sociales, o que se lee muy poco, pues si todo lo que hagamos supone un pago, los ciudadanos se negarán a hacerlo, o lo harán en menor medida. Y hay gente que no puede permitirse tal pago. Es para pensarlo.— **Carlos Gómez Martínez**. Móstoles, Madrid.

Las familias de los muertos en el Yak-42

Mi yerno, el comandante José A. Fernández Martínez, murió en el

previsible y evitable accidente del 26 de mayo de 2003 en Turquía, cuando viajaba en ese maldito avión, el Yak-42. Ese mismo avión en el que nunca viajó ni viajará ningún miembro del ministerio, ni de la cúpula militar, ni en aviones de características similares; en el que, por supuesto, tampoco volarían sus hijos ni familiares. Pero, eso sí, nuestros militares, que son considerados ciudadanos de segunda, sí tenían el deber de hacerlo.

Es obligación del contratante de vuelos *charter* el comprobar la operatividad de los aviones y la garantía del personal de vuelo, y en este caso, mucho más, por tratarse del Ministerio de Defensa (no el de Agricultura o Educación u otro no técnico en estas contrataciones), ya que el Ministerio de Defensa cuenta con una plantilla de ingenieros técnicos aeronáuticos y pilotos de reconocida profesionalidad. Además, en el mundo de la aviación se sabe que esos aviones de la anti-

Pasa a la página 13